

DIÁLOGO QUINTO

MONTESQUIEU

Sois adivino; un siglo es siempre un siglo; permitid, empero, que os diga ahora que vuestras predicciones no se realizarán. No debemos contemplar las sociedades modernas con los ojos del pasado. Costumbres, usos, necesidades, todo ha variado. No es conveniente entonces confiar sin reservas en las inducciones de la analogía histórica, cuando se trata de apreciar el destino que a esas sociedades les está deparado. Sobre todo, es preciso cuidarse de considerar leyes universales, hechos que son simples accidentes y de convertir en normas generales las necesidades de una situación dada o de una época determinada. ¿Debemos acaso inferir que el despotismo es la norma de gobierno, por el hecho de que en múltiples ocasiones históricas ha sobrevenido como consecuencia de las perturbaciones sociales? De que en el pasado pudo servir de transición, ¿He de concluir que es apto para resolver las crisis de los tiempos modernos? ¿No es más lógico afirmar que a nuevos males nuevos remedios, a nuevos problemas nuevas soluciones, a nuevos hábitos sociales nuevas costumbres políticas? Propender al perfeccionamiento, al progreso, es ley invariable de las sociedades; las ha condenado a ello, por decirlo así, la eterna sabiduría; es ella la que les niega la posibilidad de desandar el camino. Están obligadas a alcanzar este progreso.

MAQUIAVELO

O a perecer.

CULTURA DE LA LEGALIDAD: ALGUNOS SIGNIFICADOS DE UNA FRASE QUE DEBIERA SER PARTE DE NUESTRA VIDA COTIDIANA.

Olga Sánchez Cordero de García Villegas

El ensayo de la Ministra Sánchez Cordero enfatiza que el imperio de la ley y su obediencia es una función de la cultura de la legalidad, a la vez que ésta depende de la participación ciudadana y el consenso entre actores de la sociedad y el Estado en torno a normas e instituciones. Para promover la cultura de la legalidad se requiere la difusión pertinente del conocimiento jurídico, que incida en el cambio de paradigmas de pensamiento a todos los niveles, pero sobre la base de que "una verdadera cultura de la legalidad conlleva, particularmente, un cambio en la concepción de los principales operadores y difusores de la cultura jurídica: los abogados".

"...una política de legalidad es hoy la más radical de las revoluciones posibles, además de la primera de las revoluciones deseables..."

Paolo Flores D'Arcais.

Una larga tradición de pensamiento nos dice que los conflictos entre los seres humanos deben ser dirimidos, resueltos, por lo que algunos han comparado con la representación más clara de la racionalidad: el derecho.

El derecho pertenece, como dijera Don Luis Recaséns Siches, al campo de la vida humana objetivada, al campo de lo cultural¹. Tal vez, incluso, sea uno de los más acabados productos culturales del hombre.²

Y dado que el derecho forma parte de esa categoría de lo cultural, debemos comenzar por definir lo que entendemos por cultura, pues habrá de sernos de mucha utilidad como categoría de distinción respecto de otros conceptos que aquí apuntaremos y para formular nuestras conclusiones.

Cultura es, siguiendo al maestro Recaséns,³ "todo aquello que los miembros de una determinada sociedad concreta aprenden de sus predecesores y contemporáneos ... lo que añaden a ese legado y las

modificaciones que operan en el mismo." Es la *herencia social* utilizada, revivida y modificada.

Pues bien, el derecho, las normas jurídicas, en cuanto vida humana objetivada, son productos culturales. Pero no es sino hasta que esas normas son observadas o cumplidas, que puede decirse que el derecho se vuelve parte de la cultura viva o actual de un pueblo.

Así, antes de manifestar nuestra opinión respecto a las estrategias y los mecanismos que requiere la cultura de la legalidad, debemos comenzar, primero, por cuestionarnos si ¿es realmente el derecho parte de nuestra cultura?⁴

Comenzando por ahí, es muy importante señalar que nuestra tradición jurídica data de muchos siglos, que nuestros pueblos prehispánicos eran ya pueblos de leyes, de hombres, de gobierno⁵ y que, sin embargo, la cultura de la legalidad, el derecho, para seguir el concepto que hemos inicialmente utilizado, no ha sido un tema del dominio público, una cuestión que esté inmersa en nuestra vida cotidiana, un tema del que nos ocupemos regularmente quienes vivimos en un régimen de leyes.

Para quienes somos abogados, hablar de "orden normativo", "legalidad", "seguridad jurídica" o, más genéricamente, de "finés del derecho", resulta cotidiano o al menos comprensible. Las dimensiones sociales del derecho son claras para quienes tenemos el bagaje cultural de nuestra formación universitaria como abogados; pero, ¿qué sucede con quienes no lo son?

Pareciera ser que en nada interesa a quien cotidianamente se gana la vida sin necesidad de entrar en contacto con las leyes, si el derecho existe o no, si tiene connotaciones sociales, si es un producto cultural etcétera; pero no es así, por que el derecho es algo que atañe no solamente a jueces, legisladores o abogados; es algo que nos atañe a todos, o por lo menos así debería ser.

Todo mundo tiene, al menos, una ligera noción de lo jurídico; pocas gentes ignoran que existen autoridades políticas, presidente, gobernadores, jueces, ministerios públicos, policías, registro civil, compra-venta, matrimonios, abogados, contratos, notarios, fuerzas armadas, etcétera. Todo mundo sabe o relaciona todas estas cosas con el ámbito de lo jurídico; pero esa noción de lo jurídico es meramente superficial, azarosa, o, en muchos otros casos, obligada.

El derecho es parte de la vida. Conciérne, incumbe, afecta a todos los campos de la vida y, sin embargo, no es algo que tengamos presente continuamente. No es parte de esa *herencia social* a que se refiere Recaséns, no es, por tanto, patrimonio cultural vivo y presente de nuestra colectividad, no es parte de nuestra *cultura viva*.

Y no lo es porque el derecho en México es un proceso en el que participamos muy pocos, muy pocos somos los que tenemos acceso a su estudio, muy pocos los que tenemos la oportunidad de estar en contacto con las leyes, muy pocos los que podemos participar en el proceso de creación de las normas, de manera directa o indirecta, muy pocos, en fin, los que repensamos o revivimos esa objetivación de la vida humana que es el derecho.

No pretendemos, al señalar lo anterior, empatar la posición de quien elabora o modifica las leyes con la de aquél que la aplica o de quien la obedece. De ninguna manera. Lo que sí queremos hacer notar es el grado de permeabilidad que las leyes tienen en nuestra sociedad.

El derecho es reflejo de la sociedad a quien regula; pero no solo eso, también la cambia, la orienta, la transforma. El derecho es una herramienta poderosísima de cambio social⁶.

Por todo ello, es innegable la importancia del derecho en nuestras vidas; pero, precisamente por esa importancia, el derecho debiera ser parte de nuestra cultura, entendida en el sentido que hemos expuesto; esto es, debiera estar incorporado a nuestra vida cotidiana como lo están otras tantas cosas.

Practicar la justicia como derecho⁷ debiera ser, si no un objetivo, sí una costumbre que debiera ser practicada a diario en todos los ámbitos de nuestra vida.

Aprender a ser justos nos ayudaría a generar en nuestro entorno un cambio de actitud hacia el derecho, la ley, las instituciones y todo aquello que hemos ya señalado como parte de lo jurídico. Ello además, nos daría por resultado una sociedad más justa, como consecuencia necesaria de la cotidiana práctica de la justicia por hombres y mujeres más justos.⁸

Nuestra vida diaria, en síntesis, debería estar impregnada de todos los significados posibles que tiene la expresión que le da título a este artículo: Cultura de la legalidad.

Y para explicar lo que a nuestro juicio llena de contenido esa expresión, partiremos de la definición de cultura que ya hemos expuesto, para pasar, después de algún apuntamiento sobre el Estado de Derecho que también se esbozará, a diferenciar este último concepto del término "cultura de la legalidad". Proponiendo enseguida la que consideramos es la única estrategia posible para la implantación de la cultura de la legalidad: la participación, pero abundando en los mecanismos, esos sí múltiples, que a nuestro juicio pueden servir para tal efecto.

La cultura de la legalidad, entendida en su acepción más simple de imperio de la ley, ha sido siempre una constante en otras culturas.

Recordemos, sólo por citar un ejemplo, la tradición jurídica del "common law", en la que el derecho no escrito ha sido la constante y en la que la idea de derecho es tan determinante que prescinde, incluso, de algo para nosotros tan fundamental como es la constitución escrita⁹.

Sin embargo, la acepción que aquí trataremos de explicar es de reciente cuño. De hecho, rastrear su origen se torna un poco complicado y excedería los alcances de este estudio el tratar de ubicarlo, pero sí debemos señalar que la permeabilidad que ha tenido el concepto cultura de la legalidad en los últimos años se debe, en gran parte, a los cambios que se han venido sucediendo en algunos sistemas políticos, como por ejemplo los latinoamericanos, en los que el término cultura de la legalidad ha adquirido el significado que trataremos de explicar.

De igual manera, usar otros términos, como cultura jurídica, implicaría aludir a la tradición que han seguido diversos pueblos para elaborar, aplicar e interpretar su derecho¹⁰, o bien, a la concepción del derecho que ha orientado a estos grupos humanos, como la entiende Giovanni Tarello¹¹.

Intentaremos, por tanto, establecer solamente un concepto sobre el segundo de los componentes de la expresión: el término "legalidad", a fin de completar el esquema inicial de este artículo.

Dice Luigi Ferrajoli¹² que "el principio de legalidad viene a configurarse como el principio constitutivo de la experiencia jurídica moderna; en cuanto fuente de legitimación de las normas jurídicas vigentes y, por otra parte, de las válidas, es efectivamente constitutivo del moderno derecho positivo y al mismo tiempo del moderno estado de derecho".

La legalidad va mucho más allá de un conjunto de normas y leyes que están y deben estar sujetas a cambios que reflejen la evolución de la sociedad. "La legalidad entraña una manera de concebir el mundo, un modo de relación entre los individuos y una forma de interacción entre la sociedad y el gobierno. La legalidad entraña una manera de coexistir que va más allá de la ley del momento."¹³

En todos los ámbitos, el problema de la legalidad salta a la vista, pues "la ley y la justicia son dos componentes centrales del desarrollo humano y su existencia determina, en buena medida, las potencialidades de la convivencia en sociedad."

En el ámbito económico, en el político, el problema de la legalidad es patente, pero a la vez trasciende esos problemas. Es un concepto integral que no puede ser parcializado, es decir, diversificado según el campo de que se trate. No se puede hablar de un marco

jurídico para los derechos humanos, para el régimen financiero o para las elecciones. Los principios generales de un sistema jurídico tienen que ser aplicables a todas las actividades para cumplir con las condiciones esenciales que los caracterizan: certidumbre y previsibilidad.¹⁴

¿CULTURA DE LA LEGALIDAD O ESTADO DE DERECHO?

Definidos los términos que componen la expresión “cultura de la legalidad”, nos resta un asunto que tratar.

Tradicionalmente, se ha identificado al estado de derecho con la cultura de la legalidad; pero ¿Cultura de la legalidad significa Estado de Derecho?

La pregunta podría compararse con otra que debiéramos hacernos ¿Democracia son sólo elecciones?

En mi concepto, la respuesta a ambas interrogantes es no; pero trataré de responder sólo a la primera de ellas.

La expresión cultura de la legalidad trasciende a cualquier concepción que pretenda designarla solamente como cultura jurídica o Estado de Derecho.¹⁵

Veamos por qué.

El Estado de derecho ha sido tratado por la doctrina bajo múltiples definiciones, pero la mayoría de ellas pueden ser clasificadas tomando en cuenta el énfasis que se haga de sus características formales, substantivas o funcionales.¹⁶

Así, por ejemplo, las definiciones formales se construyen con base en la presencia o ausencia de ciertos caracteres, entre los cuales, por decir algunos, podemos citar: la imparcialidad e independencia con la que realizan sus funciones los poderes judiciales; división de poderes; leyes de carácter público; ausencia de leyes privativas; ausencia de leyes retroactivas y medios de control de la actividad gubernamental o control constitucional.

Por otro lado, las definiciones substantivas de estado de derecho se construyen con base en los resultados fundamentales que produce el sistema jurídico de un Estado, tales como la justicia o la equidad. A diferencia de las definiciones formales, en éstas los requisitos o parámetros que forman parte de aquéllas únicamente son considerados como medios que contribuyen al cumplimiento de estos ideales.

Finalmente, las definiciones funcionales del estado de derecho, aunque similares a las substantivas, se dirigen específicamente a conocer qué tan bien cumplen con su función la ley y las estructuras

legales de los Estados. Esto se traduce, por ejemplo, en limitar las acciones discrecionales del gobierno, en la predicción del resultado de las decisiones jurisdiccionales, o bien, una combinación de ambas. En este sentido, podríamos afirmar que un Estado en el que sus gobernantes cuentan con pocas o nulas facultades discrecionales tiene un alto nivel de estado de derecho.

En suma, y considerando lo anterior, podemos afirmar que el estado de derecho es, por una parte, un sistema donde coexisten varias notas, entre las cuales destacan: la sujeción o el imperio de la ley; el control de la ley por la tutela judicial; la independencia y separación de los poderes; el reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales del ciudadano y el control de los poderes por la vía constitucional; y, por otra parte, es un sistema en el que la aplicación de todos los anteriores axiomas tiene como principio y fin último la realización de los ideales de justicia, libertad e igualdad.

LA CULTURA DE LA LEGALIDAD, CONCEPTO DIVERSO DE SIGNIFICACIÓN MÚLTIPLE. ALGUNOS SIGNIFICADOS, ESTRATEGIA Y MECANISMOS PARA SU IMPLANTACIÓN EN MÉXICO.

Ahora bien, el término cultura de la legalidad “define mejor que cualquier otro el conocimiento que un pueblo tiene de su derecho, así como los esfuerzos que hacen grupos y facciones –principalmente el gobierno– para difundir o no difundir tal conocimiento, las variables del proceso mediante el que un pueblo acata las normas que lo rigen, los efectos concretos que este ejercicio tiene en la sociedad civil y los límites a los que se circunscribe.”¹⁷

A mi parecer, lo hemos ya señalado, la circunstancia de que en México el derecho sea un proceso poco participativo a todos los niveles hace que la única estrategia para la implantación de una cultura de legalidad sea la participación. No podrá hablarse jamás de cultura de la legalidad si no se comprende siquiera el significado de la expresión, si no se implementan los mecanismos de participación que la hagan posible.

Esos mecanismos, además, llenarán de significado el término, pues es a través de ellos que la cultura de la legalidad vendrá implantándose en nuestra sociedad. Por supuesto, la participación de cada órgano, de cada institución, de cada persona que integra esa sociedad tendrá necesariamente que ser distinta.

¿Cuáles son esos mecanismos que harán, en nuestra opinión, posible la cultura de la legalidad?

El primero de ellos, considero, el más importante, es el consenso. No se pueden alcanzar objetivos nacionales si no se cuenta con una base de consenso que permita a todos participar en los procesos de transformación que necesariamente tendremos que vivir en los próximos años.

Necesitamos del consenso para concretar acciones de gobierno, pues con la nueva conformación del mapa político del país no será posible realizarlas si no se cuenta con la aprobación de la mayoría necesaria para la aprobación de proyectos de ley en los diversos órganos legislativos.

Necesitamos del consenso en la conformación de las instituciones y en la conformación de los puestos públicos. Sin ese requisito, las instituciones serán siempre cuestionadas en la misma medida en que lo sea la actuación de los funcionarios que las integren.

Un ejemplo de ello lo hemos vivido muy recientemente en el proceso de conformación de los gabinetes que integrarán la Administración Pública Federal y del Distrito Federal pues en ambos se observa una significativa pluralidad.

Necesitamos del consenso si queremos realizar, aunque sea a largo plazo, el proyecto de nueva Constitución, proyecto que en lo personal no comparto, pero para cuya concreción tendría necesariamente que generarse el consenso.

El consenso del que hablamos se inscribe, naturalmente, dentro de los cauces establecidos en la ley.¹⁸ Sin esa característica, será imposible fundir las diversidades generadas al interior de una sociedad tan plural como la que actualmente se vislumbra¹⁹.

Cultura de la legalidad significa, sí, imperio de la ley, pero también significa obediencia de la ley, y la obediencia requiere, por necesidad, conocimiento de la ley.²⁰

Una definición genérica de lo que significa la cultura se relaciona con el conocimiento que se tiene del mundo, de las cosas, y se relaciona con la forma en que percibo y soy percibido.

De la misma manera, la cultura de la legalidad implica necesariamente conocimiento del ordenamiento jurídico. Conocimiento que puede tenerse a distintos niveles y grados, pero que tiene, como irremediable consecuencia, el fortalecimiento del orden social en un Estado.²¹

Si un ciudadano no conoce la ley que lo rige, difícilmente la cumplirá. Los ejemplos a este respecto abundan y son bastante significativos.

En la tarea de difundir el conocimiento del ordenamiento jurídico, el papel de las instituciones es fundamental. Por ello es indispensable su fortalecimiento a través del buen desempeño de sus funciones,

lo que traerá como consecuencia una mejoría en la percepción que de ellas tiene el ciudadano. Pues, desde mi perspectiva, no existe crisis en las instituciones sino más bien en la percepción que los ciudadanos tienen de ellas. Es deber de las propias instituciones labrar una nueva imagen que permita construir esa tan anhelada cultura de la legalidad.

Construir una verdadera cultura de la legalidad tiene también como presupuesto esencial la transformación de muchos paradigmas de pensamiento a todos los niveles. Desde el ciudadano común que transgrede con frecuencia ordenamientos que podrían considerarse de poca importancia —como los reglamentos gubernativos o de tránsito— hasta el más alto funcionario que falta a su deber constitucional de hacer cumplir las leyes y reglamentos. En todos los casos, la trascendencia de esas acciones es de magnitudes inconmensurables.

El incumplimiento de la ley tiene costos sociales muy altos, en lo económico, en lo político, pero sobre todo en lo cultural. Esos costos son tan elevados que no sé si sea posible cuantificarlos económicamente, pero lo que sí puede medirse es el grado de deterioro que le causa a la sociedad. Lo que no tiene medida es que sigamos viviendo en un régimen de irresponsabilidad y corrupción.²²

Hago la siguiente comparación, tal vez burda para el caso, pero, en mi criterio, significativa. Una persona me comentaba recientemente que la concepción de la iglesia católica respecto a lo que ahora se ha dado en llamar “pecado social” —que propiamente es un pecado en el que participa la sociedad en su conjunto— tenía que ver con un ejemplo que algún anciano sacerdote le ponía para magnificarle las consecuencias de un pecado en lo personal. Este sacerdote le preguntaba ¿Cuántas personas adultas pecan cuando peca un joven adolescente o un niño? La respuesta es lógica: muchas, porque en su formación han intervenido tantos adultos como ha podido conocer.

Es lo que sucede con la propagación de una *contracultura de ilegalidad*.

Una verdadera cultura de la legalidad conlleva, particularmente, un cambio en la concepción de los principales operadores y difusores de la cultura jurídica: los abogados.

Al ser los principales operadores y conocedores por tanto del sistema de derecho, a los abogados corresponde el difundir, sin falsa vanidad, con sencillez y sin medida, el conocimiento jurídico adquirido en la práctica profesional, a través de los medios que tiene a su alcance. Eso es también cultura de la legalidad. El abogado debe ser el principal difusor de esta cultura y, sobre todo, el primero en respetarla.

El abogado debe aplicar e interpretar la ley sin conveniencias ni oportunidad. Debe ser el principal difusor de una cultura de derechos

humanos que tanto nos hizo falta en otros tiempos y que ahora, parece, va tomando cada vez más fuerza en el gremio.

Cultura de la legalidad tiene que ver con una mejora sustancial de nuestra deficiente educación cívica y política y se traduce, también, en un serio compromiso de maestros y alumnos por promover los fines del derecho, por mejorar la calidad de su enseñanza y por asumir un compromiso interminable de actualización constante.

Tiene que ver con el rompimiento de esquemas de comportamiento como el clientelismo, los liderazgos caciquiles, el "charrismo" sindical y el nepotismo.

Tiene que ver con una distinta percepción ciudadana de la ley y con una nueva actitud de las autoridades de fundar y motivar sus actos y resoluciones.

Un ejemplo claro de este cambio en la percepción de la ley podría darse en materia fiscal, buscando mejores políticas de redistribución del ingreso, así como una mayor participación social de ciudadanos y autoridades. Pues cultura de la legalidad significa, además, la responsabilidad de los particulares de contribuir al gasto público, así como la obligación de las autoridades de destinar las sumas obtenidas únicamente al beneficio de la colectividad.

Sólo a través de un compromiso franco entre ambas partes se podrá abatir la práctica común que incide en el incumplimiento de la que es una de las exigencias fundamentales del Estado mexicano.

Cultura de la legalidad es también la comprensión de que, además del propósito recaudatorio que persiguen como fin inmediato las contribuciones, éstas sirven accesoriamamente como instrumentos eficaces de la política financiera, económica y social que el estado tenga interés en impulsar orientando, encauzando, alentando o desalentando ciertas actividades o usos sociales según sean considerados útiles o no para el desarrollo y crecimiento armónico del país.

Esto podría llevarse a cabo a través de una mayor justificación de las propuestas de ley en la materia señalando, por parte de la autoridad, los fines extrafiscales²⁵ de las contribuciones. Lo que haría que el ciudadano adoptara esa nueva percepción respecto de lo que los impuestos significan y contribuir al gasto público a sabiendas que esa contribución redundará en un beneficio palpable para él y los suyos.

La cultura de la legalidad tiene que ver también con la difusión de la idea de que nadie puede hacerse justicia por propia mano, ni puede erigirse, sin facultades para ello, en juez de nadie.

Esto, por supuesto, implica el pleno acceso a la justicia en todos los ámbitos, desde el juez de paz hasta las más altas esferas judiciales, lo cual conlleva, invariablemente, la profesionalización de la judicatura y el mejoramiento del servicio público a través del servicio civil de carrera, entre otras cosas²⁴.

Conlleva una cultura de protección de las minorías a todos los niveles y la tutela efectiva, por vía jurisdiccional, de los derechos sociales.²⁵

La cultura de la legalidad significativamente tiene que ver con la erradicación de esa tendencia de los medios y de la sociedad a convertirse en Tribunales y juzgar, condenar o absolver. Es abolir para siempre la "tribunalización" de la sociedad y acostumbrarnos a resolver los litigios por las vías y cauces establecidos para ello.²⁶

Tiene que ver también con el cuidado en la forma de gobierno, con evitar caer en populismos y demagogia en el gobierno y, sobre todo, con evitar "la tentación plebiscitaria", la tentación de someter gran parte de las acciones de gobierno a consideración de la población o de ciertos grupos sociales, por la vía de la consulta o el referendun.²⁷

Se debe aclarar que no trato de decir con ello que los mecanismos de participación ciudadana no deban ser empleados, sino simplemente tratar de que sean llevados a cabo bajo los cauces establecidos en la ley en los casos por ella previstos y en temas de verdadera trascendencia para la ciudadanía.

Cultura de la legalidad es también, y sobre todo, fortalecer a cada uno de los poderes en la forma particular en que cada uno necesita ser fortalecido.

El Ejecutivo, unipersonal, requiere de fortaleza en cada una de sus dependencias, en cada frente de la administración pública federal, pero también en la persona del Presidente mismo.

El Poder Legislativo se debe fortalecer a través de la unión, de la coherencia, de la fuerza y la cohesión que tengan cada una de las fracciones parlamentarias de los partidos políticos en él representados.

Y, finalmente, el Poder Judicial se fortalece en la independencia y autonomía de cada uno de sus miembros.

Este fortalecimiento únicamente puede provenir del respeto que para sí mismo tenga cada uno de los poderes y del respeto que tenga para con los demás. Ello solamente se logra mediante el establecimiento de una verdadera cultura de la legalidad que tenga a la Constitución por principio y a la ley como guardia²⁸.

MÁS ALLÁ DE LOS SIGNIFICADOS POSIBLES. (A MODO DE CONCLUSIÓN)

La cultura de la legalidad exige que cada órgano, cada familia, cada persona²⁹, asuma el papel que le corresponde desempeñar responsablemente, sin ambages ni temores.

La cultura de la legalidad tiene que permear a todos los ámbitos de la vida y hacerse presente a través de todos estos mecanismos porque con ella va implícito el mejoramiento global de nuestras condiciones de vida. Su eficaz establecimiento requiere, ante todo, perseverancia, que no terquedad, y permanencia, que no perpetuidad. Sin eso, será materialmente imposible lograr el fortalecimiento de nuestra democracia y con ello la seguridad jurídica y el bien común, fines esenciales de cualquier estado moderno de derecho.

NOTAS

¹ Recaséns Siches, Luis. *Introducción al estudio del derecho*. 6ª edición, Porrúa, México, 1981, pág. 25-28. "Hay en el mundo una serie de objetos que no son cosas ni hechos producidos por la naturaleza, sino que son creados por los hombres, que son resultado de las actividades de los humanos... todos esos objetos tienen substratos reales... Pero su ser peculiar, su esencia, no consiste en esas realidades en que se nos manifiestan... Por el contrario, su ser esencial consiste en que poseen un sentido, una significación, una intencionalidad, o bien un propósito... no son propiamente vida humana auténtica, pero constituyen rastros, huellas, resultados o productos de vidas humanas... Tales objetos, en tanto que ya hechos, ya realizados son vida humana objetivada... El derecho, en tanto que normas preconstituidas... se localiza en el universo... de las objetivaciones de la vida humana, o reino de la cultura."

² Una visión distinta de lo que es el derecho, puede verse en Dworkin, Ronald. *El imperio de la justicia. De la teoría general del derecho, de las decisiones e interpretaciones de los jueces y de la integridad política y legal como clave de la teoría y práctica*. Gedisa, Barcelona, 1992.

³ Asumimos aquí el concepto sociológico de cultura, opuesto al concepto genérico que la define como vida humana objetivada, ya antes expuesto. Op. cit. p. 27.

⁴ "Si una objetivación de la vida humana, [como el derecho] en lugar de ser repensada o revivida por un individuo o por unos pocos individuos, es repensada o revivida por la totalidad o por la mayoría de los que integran un grupo social, entonces ese objeto pertenece al patrimonio cultural vivo y presente de ese grupo social, es un componente de dicho grupo, puesto que constituye un modo colectivo de vida real de ese grupo."

⁵ En un reciente evento, organizado por Pablo Rudomín y Francisco Bolívar Zapata en "El Colegio Nacional", Don Miguel León Portilla hacía el señalamiento de que no fue sino hasta el periodo de independencia que dejó de haber gobernantes indios en nuestro sistema de gobierno. "Destino de los pueblos indígenas", pronunciada el 16 de noviembre de 2000, en el módulo "Hombre y sociedad" dentro del ciclo de conferencias "Una visión integradora. Universo- vida- evolución -hombre y sociedad".

⁶ “Cuando el Congreso, en el régimen parlamentario, adopta, sanciona una nueva ley, al mismo tiempo modifica la conducta de la gente afectada por esa ley, es decir que si la ley es regresiva, la conducta va a ser regresiva en cierto modo; en cambio si la ley es progresista, obliga a la gente a modernizarse, a adoptar una actitud más prosocial, etc.” Bunge, Mario. “El derecho como técnica social de control y reforma”. *Isonomía. Revista de teoría y filosofía del derecho*. Número 13, Octubre de 2000. Instituto Tecnológico Autónomo de México, páginas 122 y 123.

⁷ Adopto, para estos efectos, la concepción de Jacques Derrida, expuesta magistralmente en *Fuerza de ley. El “fundamento místico de la autoridad”*. Tecnos, Madrid, 1997.

⁸ Cfr. Levinas, Emanuel. “Filosofía, justicia, amor.” *Entre Nosotros. Ensayos para pensar en el otro*. Pre - textos. Valencia, España, 1993, cuya noción de justicia es expuesta en función de la preocupación por *el otro*, vid., p.ej. las frases siguientes: “El único valor absoluto es la posibilidad humana de otorgar a otro prioridad sobre uno mismo”; “El amor debe siempre vigilar a la justicia”; y, finalmente, “El estado justo surgirá de los justos y de los santos más que de la propaganda y la predicación.”

⁹ Véase, al respecto, Zagrebelsky, Gustavo. *El derecho Dúctil*. Trotta, Madrid, 1997.

¹⁰ Véase Merryman, John Henry. *La tradición jurídica Romano Canónica*. FCE, México, 1990, quien obviamente usa el término tradición jurídica propiamente para referirse a “sistema jurídico”.

¹¹ Tarello, Giovanni. *Cultura jurídica y política del derecho*. FCE, México, 1995.

¹² *Derecho y razón. Teoría del garantismo penal*. Prólogo de Norberto Bobbio. 3ª edición, Trotta, Madrid, 1998, p. 869..

¹³ Rubio, Luis, et al, coordinadores. Fix Fierro, Héctor, editor. *A la puerta de la ley. El Estado de derecho en México*. Cal y arena, México, 1994, p. 218..

¹⁴ Loc. cit.

¹⁵ Laveaga, Gerardo. *La cultura de la legalidad*. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie Estudios Jurídicos Número 8. México, 2000, p. 20.

¹⁶ Hemos adoptado esta clasificación de un artículo publicado por Stephenson, Matthew. *The Rule of Law as a Goal of Development Policy*. Consultable en la siguiente página web: <http://www1.worldbank.org/publicsector/legal/ruleoflaw2.htm>

¹⁷ Laveaga, loc. cit.

¹⁸ La unidad que se alcanza cuando los consensos son dirigidos por la ley, la pone de manifiesto Vaclav Belohradsky al señalar que, en el Imperio Austro húngaro del 900, los judíos se refugiaron, además de en la lengua alemana, en la ley “como único modo de supervivencia en medio de esta diversidad de pueblos”. Según dicho autor, “la civilización centro europea puede ser definida como ‘ultralegalista’, porque el concepto de ley, los funcionarios y los aparatos administrativos representan el único elemento efectivamente susceptible de universalización: todas las de comunidad son discontinuas a causa de la multinacionalidad del imperio” “Fuga hacia la ley, crisis del saber impersonal y posmodernidad centro europea”, citado por Bolaños Guerra, Bernardo. “Popper y la conjetura judicial en la retórica antigua”. *Isonomía. Revista de teoría y filosofía del derecho*. Número 12, Abril de 2000. Instituto Tecnológico Autónomo de México, p. 211.

¹⁹ “Ante la imposibilidad práctica de que en una sociedad compleja y plural todos

estén de acuerdo en lo que debe hacerse políticamente, es necesario que existan procedimientos que permitan adoptar decisiones públicas legítimas y ello se hace por medio del principio de la mayoría, principio que sin embargo supone también, necesariamente, el respeto a las minorías y no solo eso, sino su protección e impulso." Orozco Henríquez, José de Jesús. "Consideraciones sobre los principios y valores tutelados por el derecho electoral federal mexicano". *Justicia electoral*. (revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), número 9, 1997, páginas 95 y 96.

²⁰ "¿No tendríamos un mundo más habitable si la gente respetara la ley? Para que esto ocurriera la ley tendría que conocerse." Laveaga, Gerardo. Op. cit. p. 18. A ese respecto, véase también Cárcova, Carlos. *La opacidad del derecho*. Trotta, Madrid, 1998.

²¹ "...la adecuada difusión de nuestras disposiciones jurídicas contribuye a fortalecer el orden social de un estado. Ciertamente, *orden social* es un concepto lleno de aristas; pues puede significar la coexistencia pacífica de los distintos grupos que integran una comunidad, pero, también, la preservación del *status quo* de la misma." Laveaga, op.cit., p. 18

²² Y aunque, como dijera Fernando Savater, el problema no sea la corrupción (que es un problema mundial), sino la inmunidad, nuestra cultura de la legalidad se debe construir con base en un sistema que erradique esa inmunidad para dar paso a un régimen de responsabilidad. "El que los privilegios e inmunidades se repartan tan generosamente prueba que los mexicanos no viven en un estado de derecho." Arteaga Nava, Elisur. *Constitución Política y realidad*. Siglo XXI, México, 1997, p.35.

²³ Véase la tesis CONTRIBUCIONES. FINES EXTRAFISCALES. Octava Época, Pleno, Visible en el Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, Junio de 1991, p. 52.

²⁴ Hay significativos avances en este campo. Prueba de ello son, por ejemplo, el servicio profesional electoral, el Instituto de la Judicatura federal, los institutos de la judicatura estatales y el servicio de carrera que recientemente se ha implantado en la Cámara de Diputados.

²⁵ Sobre el tema ver, p. ej. Cossío Díaz, José Ramón. *Dogmática constitucional y régimen autoritario*. Biblioteca de ética, filosofía del derecho y política. Fontamara, México, 1998. De reciente publicación, pueden consultarse los ensayos de Juan Antonio Cruz Parceró, (sobre el tema de la ideología del concepto derechos sociales, particularmente el de este autor), Luis Prieto Sanchís, Robert Alexy, Gerardo Pisarello y Carlos S. Nino, en Carbonell, Miguel, Cruz Parceró, Juan Antonio y Vázquez Rodolfo, compiladores. *Derechos sociales y derechos de las minorías*. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas (Serie Doctrina Jurídica Número 28), México, 2000.

²⁶ "El destape de los medios mexicanos ha sustituido al antiguo 'usted por quién vota' de las estaciones para adolescentes de los setenta... por un plebiscito permanente, donde se dirime entre el auditorio si los diputados deben tener fuero o no, si la policía puede matar a los delincuentes o, en un descuido, si se vale linchar a alguien..." "¿Medios o tribunales?" Revista *Nexus* Número 274, México, octubre de 2000, p. 13. Véanse, también, los capítulos respectivos a "La opinión teledirigida" "¿Y la democracia?" en el libro de Giovanni Sartori. *Homo videns. La sociedad teledirigida*. Taurus. Pensamiento, Madrid, 1998, en los que se tratan temas como "la formación de la opinión", "video política" y "el gobierno de los sondeos", entre otros.

²⁷ Son recientes los casos de plebiscitos sobre el horario de verano, la consulta sobre la situación jurídica de los miembros de la policía auxiliar y la patente intención del Jefe

de Gobierno de legitimar su elección por la vía del referéndum anual. Véase Carbonell, Miguel. "La tentación Plebiscitaria". *Reforma*.

²⁸ La "constitucionalización" del ordenamiento jurídico supone "un proceso de transformación de un ordenamiento, al término del cual, el ordenamiento en cuestión resulta totalmente 'impregnado' por las normas constitucionales. Un ordenamiento jurídico constitucionalizado se caracteriza por una Constitución extremadamente invasora, entrometida, capaz de condicionar tanto la legislación como la jurisprudencia y el estilo doctrinal, la acción de los actores políticos así como las relaciones sociales." Guastini, Ricardo. *La "constitucionalización" del ordenamiento jurídico: el caso italiano. Traducción de José María Lujambio*. Inédito.

²⁹ Es particularmente el aspecto personal en el que la realización de la cultura de la legalidad tiene su mejor aliado, pues si no se da un cambio de actitud a nivel personal sobre el papel que la ley tiene y el respeto que le debemos, no podemos esperar que la sociedad en su conjunto cambie. Cabe aquí la remembranza del episodio narrado por Platón en "Critón o del deber" (*Diálogos*. SEP - UNAM, México, 1988) sobre la actitud de Sócrates respecto al planteamiento de eludir a la justicia ateniense que lo había hecho preso injustamente. "¿La acción que preparas no tiende a trastornar, en cuanto a ti depende, a nosotros y al estado entero? Porque ¿qué estado puede subsistir si los fallos dados no tienen ninguna fuerza y son eludidos por los particulares?"